

II. CRISIS Y ARQUITECTURA DE SUBSISTENCIA EN MEXICO

*Emilio Pradilla Cobos. **

* Profesor titular del Departamento de Teoría y Análisis, División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Profesor de asignatura en el Doctorado en Urbanismo, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México.

Asistente de investigación: CECILIA CASTRO G.
Colaboración de la UNION DE VECINOS Y DAMNIFICADOS 19 DE SEPTIEMBRE. México, D. F.

II. CRISIS Y ARQUITECTURA DE SUBSISTENCIA EN MEXICO

Introducción

La historia de la arquitectura y el urbanismo, ha sido construida como la sucesión de las grandes obras, sus diseñadores y sus distinguidos promotores, propietarios y usuarios: reyes, generales, presidentes, cortesanas, banqueros cardenales, burgueses y gobiernos. Las condiciones históricas objetivas, las estructuras económico-sociales y políticas en las que tuvo lugar el diseño y la construcción de la obra, las funciones y los agentes sociales para los que fueron creadas, se recubren con el discurso del genio y la creatividad del sujeto diseñador; los anónimos tributarios, esclavos, siervos de la gleba y obreros asalariados, verdaderos constructores, sin cuyo trabajo productivo no existirían las ciudades y los diseños de los grandes serían fantasías inmateriales y socialmente inútiles, no son sujetos de esa historia idealista y subjetiva.

La historia de la arquitectura y el urbanismo latinoamericano pasada y presente, sigue estos mismos modelos subjetivos, a pesar de que la totalidad de la población rural y, entre el 50 y el 90 por ciento de la urbana, según los países, ha producido, con su trabajo no calificado, sus misérrimos recursos, sus rudimentarios instrumentos de trabajo y sus técnicas atrasadas, las viviendas y una parte significativa de las infraestructuras y servicios de sus colonias o barrios. Los arquitectos y

urbanistas, formados como profesionales liberales para un mercado de trabajo cada vez más estrecho y controlado hegemónicamente por los grandes monopolios inmobiliarios y de la construcción, imbuidos de la dualista y las mistificaciones de su práctica como "arte" y "ciencia" creadoras, dotados de una formación técnica artesanal opuesta al moderno desarrollo de las fuerzas productivas, con un profundo desprecio por los trabajadores del sector, que son los más explotados y oprimidos de la estructura laboral, son inaccesibles para las mayorías, a excepción de aquellos que trabajan para el Estado en función de ciertas infraestructuras y servicios integrados a la población trabajadora. Estos profesionistas son cuantitativamente deficientes y qué decir de aquellos pocos que asumen un compromiso político y ponen su trabajo al servicio de los movimientos sociales de trabajadores.

La arquitectura y el urbanismo son disciplinas prácticamente desconocidas para la mayoría de la población latinoamericana. Evitaremos este camino torcido. Voluntariamente ignoraremos a los sujetos de la creación en la gran arquitectura oficial y privada para interpretar sus determinaciones socio-económicas y el precio que la sociedad paga por ella y centraremos nuestra atención en la arquitectura y el urbanismo que forzosamente tienen que desarrollar las masas empobrecidas para sobrevivir, el urbanismo que crean los trabajadores en activo o de reserva; y en el marco de la descripción de los rasgos de la onda larga recesiva, de crisis, que vive nuestra economía desde mediados de la década de los setenta, trataremos de resaltar las tendencias a la barbarie que siguen las ciudades mexicanas, particularmente la que se ha convertido en la más grande y problemática del mundo: la Ciudad de México.

No haremos historia de los arquitectos y sus obras, a la que nos oponemos, ni crítica erudita de arte a la que respetamos pero de la que desconfiamos por su subjetividad y convencionalismo, ni sesudos estudios estilísticos o semióticos que

en la coyuntura crítica actual (al menos) de las masas trabajadores se relega a un plano totalmente secundario; nos contentamos con establecer un esbozo de la relación general entre las estructuras y las coyunturas económico-sociales, el crecimiento urbano y las obras de la arquitectura oficial, la apropiación de la arquitectura y el urbanismo por las diferentes clases sociales y el Estado, y, particularmente, las prácticas de subsistencia de los trabajadores en estos campos.

1. La gran arquitectura del capital y su estado en el auge del capitalismo mexicano.

En 1968 llega a su fin la larga fase expansiva de la economía iniciada en todo el mundo capitalista después de la Segunda Guerra Mundial y que en México es impulsada por la aplicación masiva de la Reforma Agraria y las nacionalizaciones de los ferrocarriles y el petróleo llevadas a cabo por el Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), que echan las bases para un importante sector capitalista del Estado. La acelerada industrialización tuvo como punta de lanza al capital transnacional, como nodriza al proteccionismo estatal y como sustento, la creación de Condiciones Generales de la Producción por el Estado, su creciente demanda de bienes y servicios, a las empresas privadas y, a las cuantiosas transferencias del presupuesto público. La resultante es una estructura económica hegemonizada por los grandes monopolios nacionales y extranjeros, en la que el Estado tiene una intervención significativa; pero el auge económico permite que los trabajadores alcancen una mejoría considerable de sus condiciones de vida, sobre todo en términos de las formas indirecta y diferida del salario, al precio de una subordinación corporativa al partido gobernante y al Gobierno que actúa como árbitro parcial en sus relaciones con la patronal y que controla férreamente al movimiento obrero y campesino a través de una burocracia altamente privilegiada.

Durante estas décadas, el auge de la acumulación de capital privado y estatal y la creación masiva de condiciones generales para la acumulación capitalista y de la reproducción de la población, propician la expansión de los capitales inmobiliario, constructor y de la industria de materiales de la construcción que rápidamente se concentran y monopolizan. La gran arquitectura y el diseño urbano del capital y su Estado florecen. En los principales centros urbanos donde se asienta la industria y crece la actividad comercial y de servicios (Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y, en menor medida, algunas otras), aparecen las zonas industriales y los fraccionamientos residenciales de lujo en la periferia urbana, mientras en los centros comerciales tradicionales se levantan los edificios modernos de oficinas y hoteles, algunos de ellos con pretensiones de rascacielos a imagen y semejanza de las sedes del capital financiero en las ciudades norteamericanas, (la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México con aires de Empire State neoyorkino). El movimiento arquitectónico y urbanístico se incrementa hacia fines del período de auge, con la realización de grandes conjuntos de vivienda, como proyectos de renovación urbana de áreas centrales deterioradas, según los postulados de Le Corbusier y la Carta de Atenas, inicialmente destinados a los sectores populares, pero que las leyes económicas terminan asignando a la burocracia estatal y a pequeños sectores de trabajadores de ingresos medios altos; como ejemplo, la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, presentada entonces como "El más importante proyecto revolucionario para resolver los problemas urbanos en América Latina", así como la Pino Suárez, ambas en la capital. Las grandes publicadas como la Ciudad Universitaria en Ciudad de México, regida también por los códigos racionalistas, hacen que la arquitectura moderna y sus agentes locales, penetren profundamente en la estructura urbana, combiándose en un intento de conciliación con el arte nacionalista de los moralistas, cuyo resultado, independientemente de los

valores de una y otro, es una decoración monumental superpuesta a las fachadas, visible en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Polyforum Siqueiros y otros edificios de la Ciudad de México. La fragmentación de la propiedad del suelo urbano sumada al libre albedrío de propietarios, constructores y arquitectos nos ofrecen obras individuales que salpican y modifican la estructura urbana sin plan ni racionalidad. Al mismo tiempo, el auge del mercado de la tierra urbana (altamente especulativo), el impacto de las obras públicas en la expansión de la frontera urbana y la correlativa generación de nuevas rentas del suelo, o las acciones de los sectores populares para obtener un terreno y autoconstruir una vivienda, fomentan el crecimiento anárquico y caótico y la destrucción de la naturaleza; cientos de miles de hectáreas de tierra agrícola, reservas forestales, praderas y lagos naturales son devorados por el asfalto y los inmuebles destinados a la industria, al comercio, y más administrativos, de servicios, fraccionamientos residenciales y populares.

El acelerado crecimiento demográfico y físico de las ciudades, alimentado por la expulsión de población rural, doblemente determinada por el estancamiento de la producción agropecuaria en los *ejidos* y la penetración capitalista en el campo (incluyendo los cambios tecnológicos aportados por la revolución verde), propician el surgimiento de dos fenómenos típicos de las ciudades del capitalismo semicolonial o semiindustrializado dependiente: la aparición de un *ejército industrial de reserva* que integra a cerca de la mitad de la población urbana, con sus variadas formas de subsistencia (comercio ambulante, servicios personales, delincuentes, mendigos, enceradores de zapatos, lavacoches, prostitutas, etc.), que van invadiendo las calles, plazas y lugares públicos; y el crecimiento de las *vecindades*, *ciudades perdidas* y *colonias proletarias* construidas en terrenos ocupados ilegalmente o adquiridos o fraccionadores irregulares, con la total carencia de infraestructura y servicios. Este es el panorama que con-

forman la arquitectura y el urbanismo de subsistencia. El ejemplo más significativo es el crecimiento en la década de los sesenta en la Ciudad de México del gigantesco asentamiento irregular conocido como Ciudad Nezahualcóyotl sobre los terrenos salitrosos del Lago de Texcoco, desecado a principios de siglo y último remanente del gran lago en el que se localizó México Tenochtitlan. Ciudad Nezahualcóyotl en la actualidad alberga a más de dos millones de personas y cientos de agudos problemas urbanos.

El fin del "desarrollo estabilizador" está marcado por la llegada de la recesión económica y la crisis socio-política evidenciada por el movimiento estudiantil del 68' y su dramático episodio de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas del conjunto Nonoalco-Tlatelolco, suceso que hoy vemos como premonitorio. En ese marco, los Juegos Olímpicos del mismo año y las obras de infraestructura vial, deportiva, de alojamiento y el denominado "arte urbano", algunas de ellas alardes de arquitectura e ingeniería monumental (Estadio Azteca, Alberca Olímpica, Palacio de los Deportes, etc.), aparecen a la vez como cortinas de humo y despilfarros finales de un magnate en decadencia.

Uno de los productos más significativos del desarrollo capitalista de este período es la conformación de la gigantesca Ciudad de México, que se expande sobre los municipios aledaños y que, al integrarlos a la trama urbana, origina tendencias a la constitución de un sistema urbano homogéneo y discontinuo mientras se absorben ciudades intermedias relativamente cercanas al Valle de México. Tendencias similares empiezan a desarrollarse rápidamente en Monterrey, Guadalajara, Puebla y otras ciudades que entran en el proceso de industrialización en la última década del período.

El auge de la acumulación capitalista genera las contradicciones sociales fundamentales que se expresan en las formas físico-territoriales y que afectan agudamente a los sectores populares no integrados directamente al aparato productivo

y que subsisten gracias a su increíble capacidad de supervivencia.

2. La entrada en la fase recesiva y la transnacionalización de la arquitectura y el urbanismo.

La recesión económica de finales de los sesenta y comienzos de los setenta fue considerada como un simple accidente circunstancial y sentida más en lo político que en lo económico. Como salida, se buscó un reacomodo del pacto social tripartito entre Estado, burguesía y trabajadores mediante el planteamiento formal de una democratización del régimen y de la vida sindical (limitada realmente a la integración de una nueva camada de burócratas sindicalizados a las organizaciones populares corporativizadas), la concesión de mejoras en el salario directo, el cual creció hasta 1976, la aprobación de la legislación relativa a la planeación urbana (Ley de Asentamientos Humanos), la formación de nuevos aparatos burocráticos estatales en el campo de lo urbano y la vivienda y nuevos mecanismos de transferencia del salario indirecto y diferido, como los Fondos de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT, FOVISSSTE y FOVIMI). La ideología política trató de revivir el lenguaje del nacionalismo de los años treinta, sin éxitos notables, pero se acompañó con la realización de obras públicas financiadas mediante el recurso creciente del endeudamiento externo, posible gracias a la disponibilidad de capitales en el mercado mundial generada por el primer choque petrolero. Las empresas constructoras monopolistas y las grandes oficinas de diseño fueron las beneficiarias.

En las obras arquitectónicas gubernamentales parece ganar terreno una tardía variante del *formalismo brutalista* de las últimas obras de Le Corbusier y de sus alumnos europeos y japoneses, reconocibles en los inmuebles del Infonavit, El Colegio de México, la Universidad Pedagógica Nacional, el Mu-

seo Rufino Tamayo y el Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Al mismo tiempo, la inexorable marcha de la descomposición del campesinado parcelario y su migración a las ciudades, acelerada ahora por los efectos de la crisis del sector agrario iniciada la década anterior, continúa alimentando al Ejército de Reserva, sus actividades de subsistencia y el crecimiento de los asentamientos "irregulares" que se multiplicaban en las ciudades más importantes. En ellos emergen grandes movimientos de colonos que defienden la tierra ocupada y las viviendas autoconstruidas, demandan su regularización jurídica y la instalación de servicios públicos, buscando en algunos casos hacer realidad las utopías de territorios urbanos autónomos, prefiguraciones de ciudades socialistas en medio de las capitalistas; a pesar de este idealismo, sus concepciones constituyen formas de toma de conciencia reflejadas en la movilización y en las experiencias de la organización popular autónoma que son los puntos de partida del "Movimiento Urbano Popular", en la actualidad.

Entre 1974 y 1976, al unísono con el resto de los países capitalistas, México entra nuevamente en la recesión. Las tasas de crecimiento de la economía disminuyen, particularmente en el sector industrial y, sin llegar a ser negativas, originan despidos masivos de trabajadores. Sin embargo, en medio de la elevación rápida del precio del petróleo en el mercado mundial, fructifican los esfuerzos gubernamentales para expandir la producción y explotación petrolera, las cuales crecen como por encanto; las riquezas aparentemente ilimitadas derivadas del oro negro nublan la vista de empresarios, tecnócratas y burócratas al tiempo que el nuevo gobierno abandona el "Plan de ajuste" (de corte monetarista), propuesto por el Fondo Monetario Internacional, para aplicar una política keynesiana.

La danza de los millones se inicia. Los nuevos ingresos petroleros y los que se reciben mediante el crédito externo ava-

lado por los primeros, se utilizan en la ampliación del sector capitalista del Estado, con Petróleos Mexicanos —PEMEX— y la petroquímica básica a la cabeza; igualmente, se da gran importancia a la creación de Condiciones Generales de la Acumulación de Capital, particularmente en el desarrollo de centros turísticos como Cancún (iniciado en el gobierno anterior), Zihuatanejo, Puerto Vallarta, Manzanillo y Acapulco, los cuales parecen sintetizar y realizar dos temas: incrementar los ingresos de divisas y redistribuir la población de las montañas y los valles altos hacia las costas. La economía en general y la industria crecen rápidamente teniendo como locomotora al sector capitalista del Estado y su consumo de bienes y servicios producidos por el sector privado; la crisis agrícola se maquilla mediante la inyección de cuantiosos recursos en el marco de un Sistema Alimentario Mexicano cuyo lema era "la autosuficiencia alimentaria"; a pesar de todo, la creciente importación de alimentos y materias primas agrícolas consumían una parte importante del excedente petrolero. La única parte del Plan de Ajuste propuesto por el FMI que se aplicó fue la contención salarial; el salario real dejó de crecer, cambiando su signo desde 1976 y, con él, el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores urbanos.

El Estado parece presa de una fiebre planificadora. Se crea la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas la cual elabora un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, cuya apariencia de un proyecto descentralizador, reorientador y racionalizador de la distribución territorial de la población y la actividad económica, no es más que la aplicación de las tendencias mostradas por el capital transnacional, nacional o estatal en la minería (sector petrolero y siderúrgico en particular), la industria, la agroindustria y el turismo, con la utilización de técnicas prestadas del "amen agemen tohdu territuaire" aplicado en Francia en la década de los sesenta. Acto seguido, se elaboran miles de "planes de desarrollo re-

gional y urbano" para los Estados y municipios de todo el país, los cuales llenan las bibliotecas oficiales y están caracterizados por la ausencia de una investigación rigurosa y seria de los problemas existentes para desviar los recursos hacia objetivos ampulosos, demagógicos y utópicos que se reducen al llenado de formatos preestablecidos y cuyas propuestas son tan abstractas e irreales, que su aplicación es, o imposible, o totalmente arbitraria y subjetiva. Parecería que su utilidad se reduce al incremento del número y de los ingresos de las oficinas de consultoría privada de urbanismo.

El crecimiento urbano constante, la rápida acumulación capitalista y el flujo de capitales da lugar al incremento de las rentas del suelo urbano, que, junto con la ideología del poder del Estado y sus empresas y la prepotencia de la iniciativa privada, producen un cambio muy significativo en el plano arquitectónico: la ocupación intensiva en altura de los terrenos ubicados en los nuevos objetivos urbanos localizados en la periferia. Las torres de oficinas de empresas gubernamentales o privadas y de hoteles transnacionales cambian el "perfil urbano" de la capital y de otras grandes ciudades (Torres de Pemex, de Mexicana de Aviación, del Hotel Presidente Chapultepec, del First National City Bank y otras menos significativas en la Ciudad de México); se combinan nuevas tecnologías constructivas, con brillantes acabados exteriores hechos de aluminio y vidrios ionizados, que reproducen los valores arquitectónicos en boga en los países desarrollados: La Defensa y la Torre Montparnase en París, las Torres Gemelas de New York y los edificios originados por el boom petrolero y las nuevas tendencias de localización industrial en las ciudades del sur de los Estados Unidos.

Los centros turísticos en las playas continúan recibiendo a las transnacionales de la hotelería que controlan hegemónicamente el sector y que importan su estilo arquitectónico universal, contranatural, asexuado y ajeno al medio geográfico y cultural, por lo que se convierte a todos estos centros

en pequeñas Miamis para turistas norteamericanos. En ocasiones, se intentan absurdas y gigantescas caricaturas de la arquitectura Maya o Azteca que lejos de integrarse al medio, prostituyen la naturaleza histórica e ideológica de sus originales. Acapulco, más antiguo y conocido centro turístico costero de México es escenario de uno de los procesos de remodelación urbana más grande y antipopulares de América Latina; la concentración hotelera que arroja sus aguas negras a las bahías, eleva hasta un nivel insoportable la contaminación con el consiguiente alejamiento de los turistas, se acusa de culpables de la contaminación a los sectores populares que ocupan el "Anfiteatro" o ladera que cierra la playa; se pone en marcha el "Plan Acapulco" consistente en el desalojo de cien mil habitantes y en la conversión del área en un parque, al mismo tiempo que se ejecutan millonarias obras de drenaje para limpiar la bahía. Los colonos son reacondicionados en un loteamiento denominado engañosamente "Ciudad Renacimiento", del otro lado de las colinas, en terrenos anegadizos, donde deberán iniciar nuevamente los procesos de construcción. Es el urbanismo al servicio del gran capital transnacional en el turismo. El Plan Acapulco genera un amplio movimiento popular de rechazo y protesta, que logra reavivar al movimiento de colonos pobres a escala nacional y abre las puertas al proceso de centralización organizativa de la Coordinación del Movimiento Urbano Popular.

En el campo de la acción habitacional del Estado se dio un cambio sustancial: los organismos creados en el gobierno anterior que habían impulsado importantes proyectos de conjuntos de vivienda para cuya construcción se controlaba a las grandes empresas constructoras, y que generaban una importante participación institucional en la promoción, diseño, control productivo y comercialización, se convirtieron en simples promotoras y financieras de proyectos externos. Los síntomas de la aceleración del proceso flacionario y de la caída del salario real, se dejan ya sentir sobre la reducción del

área de construcción de las viviendas, la disminución de la calidad estructural y habitacional y la reducción de los servicios sociales en las promociones estatales de vivienda.

Sin embargo, la gran cantidad de recursos en manos del Estado permite, al menos en la Ciudad de México (donde la crisis del transporte, unida a la extensión sin control de la ciudad sobre los municipios integrados de su periferia ha elevado el tiempo dedicado por los trabajadores al desplazamiento en hasta tres o más horas diarias, con una gran baja en la productividad de su trabajo), hacer grandes inversiones en el tren subterráneo (Metro), para el cual se diseña un ambicioso proyecto de ampliación. Al mismo tiempo, se municipaliza en el Distrito Federal (sólo una parte de la Ciudad de México) el sistema de transporte por autobús. Para dar salida al acelerado incremento del número de vehículos en circulación, producto de una industria automotriz en constante crecimiento, la ciudad es cuadriculada por un sistema de "ejes viales", cuya construcción da lugar al desplazamiento de miles de familias hacia la periferia, empujados por el urbanismo del "bulldozer". En otras ciudades se sigue, a menor escala, la misma tendencia, son muy conocidas las obras de "renovación de áreas centrales" en Monterrey y Guadalajara, las cuales, después de desalojar a miles de familias y destruir la tradición histórica de la ciudad, dan lugar a escenarios hollywoodenses de opereta llenos de falsas fachadas y locales inacabados, ya que la crisis llega antes de terminar la operación comercial y saturar los generosos espacios comerciales y de oficinas.

En 1981 llega a su fin la danza de los millones. El precio del petróleo cae abruptamente y se contrae su mercado mundial del crudo. Los precios de las materias primas agrícolas y mineras siguen la tendencia del petróleo debido al proteccionismo de los países desarrollados que reducen sus importaciones. México, Brasil, Argentina y Venezuela, los países de mayor desarrollo relativo, llegan al punto de la insolvencia en

el pago de su gigantesca deuda externa, incrementada por el alza de las tasas de interés, al tiempo que el desequilibrio estructural de la balanza de pagos y la fuga masiva de capitales estrangulan la reproducción de la economía. La aparatosa nacionalización de la banca, convertida en cascarón vacío, simple canal de transferencia de capital al extranjero y al borde de la quiebra, aparece como el último acto antes del derrumbe; muchos tenían la esperanza de que por este camino se pusiera en manos del capitalista colectivo el financiamiento de la vivienda y el sistema hipotecario e inmobiliario controlado por los banqueros privados, pero unos meses más tarde la ilusión se desvaneció al ser reintegradas estas actividades al capital privado.

En este período se observa la nueva tendencia de localización territorial del capital transnacional en México, cuyos dos ejes fundamentales son: el desarrollo rápido de la implantación de maquiladoras plantas donde se lleva a cabo el ensamblaje intensivo de partes importadas que luego son re-exportadas al extranjero, en las ciudades pequeñas y medianas de la franja fronteriza con los Estados Unidos, para obtener sobre ganancias derivadas de los bajos salarios, la extensión de la jornada de trabajo, la ausencia de prestaciones laborales, el trabajo femenino barato, las exenciones arancelarias y fiscales, los bajos costos de materias primas y las infraestructuras y servicios subsidiados por el Estado; la instalación de grandes empresas de fabricación y ensamblaje de autopartes, automóviles, equipos de oficina y electrónicos, destinados a la exportación, que combinan las ventajas anteriores con la cibernética, la robótica y los sistemas flexibles de producción, surgidas como parte de la transnacionalización, relocalización y reestructuración de los procesos productivos iniciada en los países desarrollados después de la crisis de mediados de los setentas, ubicadas en ciudades "medias" del norte y centro-norte del país: Aguascalientes, Gómez Palacio, Saltillo, Chihuahua y más tarde, Hermosillo. La planeación ur-

vana y los programas de dotación de infraestructuras, de servicios y de vivienda son modificados a toda prisa, para adecuarse a estas implantaciones industriales, las cuales se subastan al mejor postor entre los Estados, en razón de los beneficios que derivan de ellas el capital y las administraciones locales.

Las contradicciones generadas por todas estas tendencias dislocadas y anárquicas, van a cristalizar en procesos territoriales altamente contradictorios. La modernización de las estructuras urbanas se manifiesta en las nuevas edificaciones en los centros de gestión, las áreas de fraccionamientos residenciales de lujo o de condominios para la pequeña burguesía "moderna" y los nuevos sistemas viales periféricos que amplían las áreas urbanizables y de acción del capital inmobiliario y constructor; el surgimiento y rápido crecimiento de colonias proletarias irregulares en la periferia carentes de todos los servicios, en las que se construyen la vivienda por cuenta propia y la multiplicación en ellas y en las de cierta antigüedad, de formas como la vecindad o el cuarto redondo; finalmente, la destrucción de la naturaleza causada por la implantación de grandes empresas minero-extractivas o industriales, la localización de colonias populares sin sistemas adecuados de drenaje y la incorrecta evacuación de los desechos sólidos, y líquidos de la industria y el consumo doméstico. Rápidamente se avanza hacia límites máximos de contaminación del ambiente, particularmente en la Ciudad de México, debido al crecimiento incesante del número de automóviles privados, como efecto del boom de la industria automotriz y las acciones de adecuación de las políticas urbanas del Estado a las necesidades empresariales y de los usuarios.

3. La crisis permanente y la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores en las ciudades.

Desde 1982, la crisis económica ha sido permanente y

profunda. Las de crecimiento de la economía y de sector clave, la industria, han sido negativas. La deuda externa pública y privada no ha dejado de crecer debido a la necesidad de recurrir a ella para pagar su propio servicio, el cual absorbe cerca de la mitad del presupuesto estatal y una parte sustancial de los ingresos de divisas; simultáneamente, para cubrir el gasto público y mantener las inversiones mínimas, ha sido necesario contraer una deuda interna superior en monto a la externa. La hiperinflación se ha hecho estructural y ha reducido el poder de compra real de los salarios en más de un 60 por ciento según los topes salariales, que forman parte del Plan de Austeridad pactado con el FMI y la banca multinacional y que consisten en aumentos salariales inferiores a las tasas inflacionarias, a fin de elevar las ganancias obtenidas por el capital. Si a ello sumamos el desempleo abierto generado por la recesión (cerca del 20 por ciento de la población económicamente activa) y que un 45 por ciento de la PEA sólo obtiene ingresos insuficientes e inestables mediante la realización de actividades de subsistencia, entenderemos las causas de la caída de la demanda interna y de la producción y el intercambio de productos agrícolas e industriales y de servicios a cerca del 50 por ciento. Aunque se ha logrado un saldo positivo de la balanza de pagos, éste se explica fundamentalmente por la caída de las importaciones de medios de producción para una industria paralizada, y la conversión de las exportaciones en política básica y objetivo principal de la economía.

El período se abrió con una política económica claramente monetarista en su sustentación "teórica", y neoliberal en su contenido político que consiste en la reconversión y modernización de la economía y la política y cuyos principales ejes son:

* El mantenimiento de los salarios reales directos muy por debajo del nivel alcanzado en 1976, a fin de incrementar

las ganancias empresariales mediante la sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

- * La reducción drástica de los salarios indirectos y diferidos canalizados por los organismos estatales a través de la seguridad social, los fondos de vivienda, el sistema educativo, el transporte público, etc., por medio de la contracción del presupuesto estatal y, particularmente, el denominado gasto social.

- * La modernización a ultranza de la actividad económica pública y privada mediante la introducción de nuevas tecnologías como la cibernética, la robótica, la digitalización y los sistemas flexibles de fabricación, las cuales reducen significativamente la fuerza de trabajo necesaria y originan la expulsión masiva de trabajadores.

- * La orientación de la producción hacia las exportaciones, siguiendo el modelo de los países del sureste asiático, lo cual implica el empleo de maquiladores y la transnacionalización de la producción industrial y el apoyo incondicional al turismo, controlado por las transnacionales.

- * Una apertura mayor al capital extranjero, particularmente el japonés y de otros países asiáticos, que buscan establecer en México sus plantas de ensamblaje para beneficiarse de las ventajas relativas señaladas y por la corta distancia hacia el mercado norteamericano, con la intención de integrarse a la llamada cuenca del Pacífico.

- * La reprivatización del sector capitalista de Estado, incluyendo servicios públicos, mediante la liquidación de grandes empresas (Fundidora Monterrey y Aeroméxico, entre otras), la venta parcial o total al capital privado nacional y extranjero (lo que ocurrirá con el 70 por ciento de las empresas estatales, incluyendo Teléfonos de México, Ruta 100 de transporte urbano en el Distrito Federal, la recolección y reciclaje de basura, etcétera), y la rentabilización capitalista de las que mantenga el Estado bajo su control.

- * Una apertura total del mercado, mediante la eliminación

de trabas aduanales y arancelarias a la importación de bienes manufacturados de consumo.

- * La Elevación del grado de concentración monopólica del capital como resultado de la combinación de las medidas anteriores, con la consecuente destrucción de pequeñas y medianas empresas.

- * La liquidación generalizada de conquistas laborales como los contratos colectivos a fin de poder reestructurar los procesos de trabajo, despedir trabajadores y reducir el salario.

Se trata de una reestructuración global del funcionamiento de la economía siguiendo los mismos lineamientos de la que se lleva a cabo en los grandes países desarrollados y en otros países latinoamericanos, particularmente en Chile.

La crisis y las políticas puestas en práctica para tratar de resolverla, han hechado a andar tendencias claras en la organización del territorio y las ciudades mexicanas que empiezan a producir cambios en sus estructuras, en un sentido contrario a los intereses de los trabajadores.

La expansión de la maquila y las grandes plantas de ensamblaje para exportación en las ciudades fronterizas y de los estados del norte, unida al tránsito de indocumentados hacia el sur de los Estados Unidos y las relaciones comerciales en el marco de una desintegración territorial y económica con el resto del país, está propiciando una integración productiva, social y cultural a las regiones del sur de los Estados Unidos que se expanden en su nuevo proceso de industrialización avanzada. En su momento, las condiciones extremas de explotación impuestas en las maquilas (jóvenes, mujeres trabajadoras, salarios iguales o menores al mínimo, carencia de sindicatos, inestabilidad y rotación constante en el empleo, ausencia de prestaciones laborales de ley, etc.), convierten en verdaderos tugurios a las ciudades fronterizas, lo cual se manifiesta en la expansión de las colonias proletarias irregulares carentes de servicios y con pésimas condiciones de habitabilidad; la orientación masiva de los recursos estatales a la

dotación de infraestructuras y servicios a las maquiladoras agrava esta situación.

A los antiguos centros turísticos costeros, se han añadido otros nuevos (Huatulco es el más importante), con su secuela de destrucción irracional de la naturaleza, de ruptura de las comunidades locales y expulsión de sus miembros, de introducción de una arquitectura extraña y antagónica de las características naturales, económicas y sociales locales, la atracción de población migrante sin empleo, ni acceso a la vivienda y los servicios adecuados. Todo lo anterior ha fomentado la creación de nuevos asentamientos irregulares. Este desplazamiento relativo de la urbanización hacia las costas, es simplificado por la penetración de capitales asiáticos orientados hacia la cuenca del Pacífico: el de turismo en Baja California, el de la industria en Ciudad Lázaro Cárdenas, asiento del mayor complejo siderúrgico de propiedad estatal; el de transporte en puertos como Salina Cruz, para el desplazamiento de materias primas petroleras y petroquímicas, etc. La otra región de concentración de actividad y población es la zona petrolera del Sureste, donde a pesar de la crisis, sigue manteniéndose esta actividad insustituible para la acumulación de capital y el pago de la deuda externa. Así, se acentúa la desigualdad regional, en la medida que las áreas de agricultura campesina ejidal, comunal o minifundista del centro y sur del país mantienen su atraso y siguen siendo expulsoras de fuerza de trabajo hacia las ciudades o hacia los Estados Unidos.

Las tendencias de relocalización de las nuevas inversiones no significan la disminución de la concentración en las regiones urbanas tradicionales: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México; esta última ha continuado su crecimiento demográfico y físico, hasta alcanzar los 20 millones de habitantes, que la colocan en el primer lugar en dimensión y contradicciones en el mundo; su expansión sobre localidades periféricas, y la de las otras ciudades del Valle de México (Cuerna-

vaca, Puebla-Tlaxcala, Pachuca, Toluca y Querétaro, y otras menores), está dando lugar a la homogenización del territorio y la conformación de un gigantesco sistema urbano discontinuo de cerca de 30 millones de habitantes.

La acentuación de la desigualdad en la distribución de la renta nacional entre capital y trabajo se muestra claramente en los cambios en la estructura urbana y su arquitectura. La industria de la construcción y el sector inmobiliario privado, después del estancamiento debido a la recesión y la reducción del gasto público, del cual sólo salieron bien librados los grandes monopolios con capitales muy diversificados en el sector financiero especulativo y otras actividades, y de la elevación notoria del grado de monopolización, han ido lentamente asumiendo las inversiones congeladas (casos notorios son la conclusión del Hotel Plaza en el centro de la ciudad, suspendido durante varios años, y el inicio de la construcción de 24 hoteles en diferentes ciudades en coinversión entre el grupo ICA y capital japonés) y otras nuevas impulsadas por el capital extranjero recién llegado. En la Ciudad de México, el ejemplo más importante, que materializa en piedra la competencia entre capital norteamericano y japonés, es la construcción, en terrenos contiguos, de los Hoteles Presidente Chapultepec y Nikko, con su arquitectura grandilocuente, repelente y agresiva, que lacera al Bosque de Chapultepec, una de las pocas áreas pulmón del centro, ahora cruzado por múltiples vías rápidas y puentes, algunos de ellos justificados por estos dos hoteles y por la zona de negocios y de condominios de lujo que es Polanco. En la capital y en el resto de las grandes ciudades, la hotelería transnacional, los edificios de oficinas y los centros comerciales, de propiedad de las grandes cadenas transnacionales, se multiplican rápidamente en las zonas urbanas de ingresos altos y medios, inundados de mercaderías sofisticadas e importadas, mostrando los beneficios obtenidos de la hiperinflación, implantando su arquitectura barata, eficientista, de aparador, homogénea y repetitiva,

que desperdicia miles de metros cuadrados en estacionamientos pavimentados carentes de vegetación. Les hacen compañía, con una arquitectura aún más desagradable, las cadenas de restaurantes de capital extranjero (Mc. Donalds, Vips, Wings, Linys, etc.) que venden caro la comida de mala calidad.

El creciente desempleo se manifiesta físicamente en la irrupción en todos los puntos de las ciudades, de infinidad de actividades de subsistencia: vendedores ambulantes en los cruceros de las vías o en plazas, parques, estaciones del metro y camioneras, paradas del transporte público, puentes peatonales, etc., vendedores semifijos en las esquinas de gran circulación peatonal y que venden desde comida hasta productos de contrabando; tragafuegos, comediantes, prostitutas y ladronzuelos, que muestran a los ciudadanos los efectos de la crisis del capitalismo dependiente. En la Ciudad de México, se calculan 2 millones de vendedores ambulantes y semifijos y no hay datos sobre otras actividades de subsistencia. A pesar de la represión oficial y de la agresión de los comerciantes formales, estas actividades marcan profundamente la cotidianeidad en el paisaje urbano. Otra cara, más problemática de la crisis es la creciente violencia urbana. La violación, la agresión física, el robo, la drogadicción, el alcoholismo, el pandillerismo y las bandas infantiles y juveniles crecen en la medida que se cierran las oportunidades de empleo para los jóvenes, la austeridad en el gasto público del sector educativo reduce las posibilidades de ingreso y permanencia en las escuelas y la juventud carece de posibilidades recreativas y culturales; los barrios más afectados son las grandes concentraciones de población popular.

Excepción hecha es la construcción de vivienda llevada a cabo a raíz del terremoto de 1985; los organismos estatales de vivienda han reducido su acción debido a la contracción presupuestal y la reducción del monto real de las contribuciones de asalariados y empresarios. La llamada vivienda de inte-

rés social construida por la empresa privada y financiada con créditos estatales preferenciales, a pesar de haberse reducido al mínimo su dimensión y servicios, sólo es accesible al 7 por ciento de la población de más altos ingresos. La solución a las necesidades de vivienda de los sectores populares urbanizados o los migrantes campesinos, ha recaído, como a lo largo de las últimas 4 décadas, en las formas de subsistencia: ocupación ilegal de lotes baldíos sin servicios, o los "cuartos redondos" y las vecindades en las colonias populares.

La contaminación ambiental ha llegado a niveles críticos en las grandes ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, donde durante el último año, se superaron diariamente los niveles tolerables de contaminación del aire, convirtiéndose en factor de aumento de la mortalidad animal y humana a causa de enfermedades en las vías respiratorias, cáncer del pulmón o de la piel y daños visuales. Los niveles de ruido superan la tolerable dando lugar a enfermedades de los órganos auditivos. La ausencia de recolección y tratamiento de desechos líquidos y sólidos, para lo que el presupuesto público se ha reducido por la austeridad, está contaminando peligrosamente los mantos acuíferos subterráneos y de superficie con tóxicos químicos y orgánicos. La ausencia de sistemas de drenaje en extensas áreas de vivienda popular ha generalizado la evacuación superficial de aguas negras y el de fecalismo al aire libre, por lo que el viento distribuye sus contaminantes por toda la ciudad. Irónicamente, las elegantes fachadas de aluminio, concreto y cristal ionizado de las torres de la gran capital, cuidadosamente diseñadas y construidas, desaparecen en muchos días del año, detrás de las plumizas capas de contaminación atmosférica.

Con la recesión, cayó verticalmente la venta de automóviles después del boom, única ventaja obtenida de la crisis, y se hizo más lenta la integración de vehículos particulares al tránsito urbano, causante del 75 por ciento de la contaminación atmosférica. Sin embargo, la concentración es tal, que la

velocidad de desplazamiento ha disminuido a menos de 30 kilómetros por hora; el 70 por ciento de automotores particulares, que transporta sólo al 30 por ciento de los pasajeros, impide un adecuado desplazamiento del transporte público que moviliza al 70 por ciento de los pasajeros. Si exceptuamos la construcción del Metro de la Ciudad de México, que ha continuado aunque a un ritmo menor por la austeridad del gasto público, la inversión estatal en medios de transporte público ha sido casi nula, llevando a que pequeños, medianos y grandes propietarios vayan privatizándolo mediante la introducción de material ineficiente, sin mantenimiento, muy contaminante y poco racional, como los autos y microbuses fundamentales del caos de la circulación; la privatización como política estatal favorita tiende a agravar este problema.

4. El terremoto de septiembre de 1985 en la ciudad de México

El 19 de septiembre de 1985 ocurrió el más violento y trágico movimiento telúrico que registra la Ciudad de México en su historia. Miles de edificios de oficinas, hoteles y comercios, cientos de locales escolares, decenas de miles de viviendas horizontales o verticales se vinieron abajo o quedaron fuertemente afectadas e inhabitables sepultando bajo sus escombros a un número incalculable de seres humanos.

El sismo mostró las contradicciones de dos formas de hacer arquitectura y construcción. La Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, presentada al mundo como la más grande de América Latina y como modelo de soluciones urbanas y de vivienda, debilitada por las fallas constructivas, por su modelo arquitectónico le corbusiano inadecuado al tipo y a la naturaleza sísmica del suelo, a consecuencia de daños de anteriores sismos cuya reparación no se había llevado a cabo a tiempo, fue gravemente afectada, derrumbándose varios de sus edificios, con un elevado saldo de muertos; igualmente sucedió con la

Unidad Pino Suárez, diseñada por el mismo arquitecto (quien paradójicamente recibió el Premio Nacional de Arquitectura al año siguiente), y con varias unidades del Centro Médico, la unidad hospitalaria más grande del país; el inusitado número de locales educativos de baja altura afectados, puso en evidencia fallas graves de los sistemas constructivos en obras públicas y presuntas corruptelas en los contratos; desgraciadamente nunca se llevó a cabo ninguna investigación conducente a castigar a los responsables de esta criminal negligencia. Por otro lado, el alto número de edificaciones dañadas construidas después de los 50, en lotes pequeños, pero con alturas considerables, puso en tela de juicio, aunque nadie lo analizó así, el modelo fragmentario, aislado, individualizado y anárquico de reconstrucción de las áreas antiguas, que dan lugar a muy desiguales cargas físicas sobre terrenos de baja construibilidad; los dueños o inquilinos, nunca pudieron recuperar los daños económicos, psicológicos y morales causados por la ineptitud de los constructores y diseñadores.

La usura y el descuido de los propietarios de vecindades, que extorsiona a sus inquilinos mediante el cobro de rentas sin relación alguna con el bien entregado y que evitan cualquier mantenimiento de las viviendas, se puso de manifiesto con el derrumbe de muchas de ellas en las áreas centrales (Tepito, la Guerrero, Doctores, etc.), aunque, en definitiva, obtuvieron una ganancia: escapar del estatuto de "congelación de rentas" que beneficiaba a sus inquilinos y en muchos casos, vender a precios mayores a los reales sus inmuebles al Estado a través de la expropiación. Otra corrupción que salió a la superficie, fue la aguda situación de sobreexplotación y opresión a la que se somete a las costureras en las maquiladoras instaladas en edificios que se derrumbaron en el sismo enterrando bajo sus escombros a muchas de ellas. En el movimiento social, se logró romper la barrera e iniciar su organización sindical defensiva.

El sismo puso en crisis a la planeación urbana. El progra-

ma de Reordenamiento Urbano y Protección Ecológica se derrumbó el día del sismo; sus principales postulados quedaron en entredicho. Se planteaba rodear a la ciudad con un "cinturón de reserva ecológica" infranqueable e inconstruible, combinado con un límite formal y legal a la urbanización en los municipios conurbados del Estado de México (límite que sería dibujado con pintura o señalado con mojones) y a través de un reglamento urbano poco efectivo, con el objetivo de evitar nuevos asentamientos populares periféricos. De otro lado, proponía el desarrollo de núcleos urbanos hacia el interior de la actual ciudad, con edificios de alta densidad y altura, destinados al comercio, la administración y la vivienda de sectores de altos ingresos y cuya realización correría por cuenta del capital mixto Estado-Empresa privada, para lo cual se pretendía desalojar a los sectores populares residentes, incapaces de cubrir los costos de las nuevas viviendas y los impuestos, y de las participaciones en la inversión. Se expulsaba población de las áreas seleccionadas para los centros y se prohibía su localización en la periferia, lo que la hubiera obligado a hacinarse aún más en las colonias populares intermedias. Hasta ahora, nadie ha vuelto a mencionar al PRUFE, sobre el cual se tendió una cortina de silencio.

En los primeros momentos de la tragedia la sociedad capitalina se volcó a las tareas de salvamento, ante las titubeantes acciones del Estado, logrando salvar muchas vidas, a pesar de la acción apresurada de ciertos organismos gubernamentales; luego se desarrolló la solidaridad nacional que junto con la ayuda internacional, permitió garantizar las mínimas condiciones de albergue y subsistencia de los damnificados. Del dolor y la necesidad fue surgiendo un profundo y sólido movimiento social de base territorial, protagonizado por los damnificados, que fue subiendo de la colonia a la coordinación a nivel urbano y se articuló estrechamente al "Movimiento Urbano Popular" preexistente, a otras organizaciones de masas, a los organismos políticos y a instituciones sociales como

las universidades, y a los profesionistas comprometidos con los intereses populares.

A pesar de todas las limitaciones, el movimiento de damnificados y sus organizaciones lograron arrancar conquistas fundamentales. Se evitó el desplazamiento masivo de los damnificados hacia la periferia lejana y se impuso en muchos casos la reconstrucción y su realojamiento en las mismas zonas de habitación anterior, incluyendo la Unidad Tlatelolco, cuya reparación aún no concluye; la Pino Suárez es hoy día un esqueleto de fierro irreparable que nos recuerda el dolor de sus habitantes y la irresponsabilidad de sus constructores. Para hacerlo posible, se logró la expropiación de los terrenos afectados por el sismo, aunque las autoridades impusieron la redistribución de la tierra bajo propiedad privada y se logró evitar muchos desalojos innecesarios. Se conquistó la creación de Renovación Habitacional Popular para los damnificados y se luchó contra su burocratismo y corrupción inicial para lograr la reconstrucción de la vivienda en condiciones menos gravosas de pago. En algunos casos, se obtuvo el incremento de áreas de terreno a la construcción y de la dotación de servicios, que trataban de fijar los organismos estatales. Y lo más importante, se conquistó el reconocimiento del derecho democrático a la organización ciudadana, su representatividad como interlocutores del Estado y su mantenimiento después de la reconstrucción. Muchas de estas organizaciones se han mantenido con funciones múltiples de organización y representación ciudadana y han ingresado a la participación política a través de candidatos propios en los órganos legislativos a diferentes niveles.

Es aún prematuro hacer una evaluación objetiva de la arquitectura de la reconstrucción, en la cual se combinaron muchos agentes e intereses; empresas comerciales de la construcción, organizaciones sociales como las universidades, profesionistas independientes comprometidos y los propios damnificados. En este balance existirá siempre la variable

inamovible de las normas mínimas, absolutamente insuficientes para una vida cotidiana cabal tanto en la vivienda, como en los servicios y las actividades sociales; las viviendas reconstruidas se mantendrán por lo tanto como parte del déficit habitacional y como viviendas transitorias. Los damnificados nunca recuperaron todo lo perdido y están endeudados con los organismos estatales. Además, muchos damnificados continúan esperando la reconstrucción de sus viviendas (los de la Unidad Tlatelolco entre ellos), o una solución cualquiera a su necesidad.

La reconstrucción hizo evidente otra paradoja del Estado. Meses después del sismo debía realizarse el Campeonato Mundial de Fútbol (junio de 1986), asignado a México, en plena crisis, al resignar Colombia la sede por falta de recursos. Las inversiones necesarias en cuantiosos satélites y centros de comunicación, residencias para jugadores y turistas, renovación, reconstrucción, ampliación o construcción de estadios, en muchos casos, excesivamente grandes para las necesidades de la población residente en las ciudades (Irapuato y Querétaro, por ejemplo), y obras viales; al ocurrir el sismo, se pensó que por la emergencia y los costos requeridos por la reconstrucción, se abandonaría el proyecto, cuyos mayores beneficiarios eran empresas privadas nacionales o extranjeras; sin embargo no fue así y el Campeonato se llevó a cabo frente al dolor y la penuria de cientos de miles de mexicanos.

5. *Arquitectura, urbanismo y subsistencia de las mayorías en la crisis*

A siete años del inicio de la parte más dura de la larga fase recesiva, nadie se atreve a decir cuándo concluirá. Si los programas de ajuste (Pacto de Solidaridad Económica en el momento actual), han congelado algunas de las variables más obvias, como la devaluación monetaria e inflación, a costa del congelamiento salarial y la continuación de la caída del sala-

rio en términos reales, nadie sabe cuanto se podrá sostener, debido a la pérdida de la competitividad de las exportaciones, al pago de la deuda externa, al desempleo y a la miseria, a los efectos recesivos de la contracción forzada del gasto público y a la liquidación de las paraestatales o su privatización en un momento en que la iniciativa privada ha suspendido sus inversiones y mantiene capacidades ociosas muy altas; los sectores públicos y privados continúan despidiendo masivamente trabajadores y se inunda el mercado con productos de importación en el marco del "libre comercio". De los trabajadores en 1976, el cual distaba mucho de ser justo y satisfactorio para los asalariados o los desempleados, costará años de lucha y sacrificio, pues las políticas burguesas nacionales e internacionales de reestructuración capitalista no se orientan en ese sentido. Sabemos bien que el capital en la región trata de mantener el salario a un nivel inferior a las necesidades de la fuerza de trabajo y a las condiciones de desarrollo de la economía, para que los beneficios puedan fluir hacia el exterior a manos de la banca multinacional acreedora, las ganancias y las regalías a las matrices de las transnacionales y las inversiones de los nacionales fuera del país, a los bancos extranjeros.

Las ciudades son una clara manifestación de todas las contradicciones sociales además de aportar las propias. El capitalismo dependiente nunca garantizó a los trabajadores las condiciones urbanas y de vivienda adecuadas; el peso de estas necesidades recayó siempre sobre las espaldas de los trabajadores mismos, incluyendo la construcción y dotación de vivienda e infraestructura y servicios que el Estado entregaba y sigue entregando a los empresarios y a los perceptores de altos ingresos. Los trabajadores han construido sus ciudades al margen de la arquitectura y sus profesionistas, sin las reglas del urbanismo, a pesar del urbanismo o contra el urbanismo. Al hacerlo así, han desgastado más rápidamente su capacidad productiva y la de su familia, han tenido que re-

ducir otros consumos esenciales como educación o salud, han pagado realmente un precio mayor al que resultaría de aplicar las condiciones técnicas y sociales medias por una vivienda siempre insuficiente e inadecuada, han alargado su jornada de trabajo mucho más allá de las 45 horas semanales formalmente establecida, incluyendo en ella el largo tiempo empleado para el transporte y el de la construcción de sus viviendas, que es uno de los componentes básicos de su labor; han aportado con su sudor, plusvalía absoluta adicional para sus patronos y han servido, por la fuerza, para que el valor de toda la fuerza de trabajo se deprima en beneficio del capital.

La historia de los trabajadores se repite, sin cesar, como rueda de noria, pero, aparentemente, colocándose cada vez en un nivel más bajo.

Si observamos hoy las colonias irregulares de hace dos o tres décadas (Ciudad Nezahualcóyotl, por ejemplo), nos encontramos ante una situación muy similar a la de los inicios de este proceso, o a la de otras colonias irregulares en años posteriores.

Puede haber desaparecido la irregularidad jurídica de la tenencia del suelo; puede que algunas de las vías principales de penetración, donde se han instalado comercios, no necesariamente de pequeño capital local, se haya pavimentado, quizá haya agua potable y electricidad; seguramente, muchos habitantes pobres han abandonado estos lugares para ir a repetir el proceso en otros sitios, cediendo sus logros a sectores de ingresos mayores; pero el problema urbano y de la vivienda no se han resuelto.

La mayor parte de las viviendas conservan sus características inadecuadas de habitabilidad, dimensión y debilidad estructural, las vías son lodazal en verano y arenal polvoriento el resto del año. Los drenajes seguirán siendo insuficientes para recoger las aguas negras y pluviales; la basura se continuará apilando en terrenos baldíos o en las calles mismas ante

la ausencia de sistemas de recolección; el transporte seguirá siendo insuficiente, incómodo, tortuoso y demasiado demorado; se carece de educación y atención médica adecuadas; y el desempleo, la miseria y tantas carencias habrán generado el pandillerismo, la violencia, el alcoholismo y la drogadicción, las cuales se reflejan en las frases y dibujos que graban en los muros con spray de colores. Una generación entera se habrá sacrificado para que la siguiente se mantenga poco más o menos en la misma situación, por lo que no ha habido ni habrá movilidad vertical entre clases sociales, porque estas generaciones siguen siendo parte de la clase trabajadora que continúa perdiendo su participación en la riqueza nacional para beneficio del gran capital nacional y extranjero.

Mientras tanto, en otros lugares tan inhóspitos e inconstruibles como los anteriores, millones de pobladores inician el proceso con iguales o peores condiciones que los que los precedieron hace una generación. En todas las ciudades mexicanas se observan los fraccionamientos irregulares en pedregales, terrenos pantanosos o dunas de arena, sin agua potable y corriente por lo que se ven precisados a adquirirla a precios elevados y cargarla por kilómetros. En estos fraccionamientos sin drenaje ni servicios sanitarios, sus habitantes defecan al aire libre y depositan la basura en la propia calle, por donde corren libremente las aguas negras, se roban furtivamente la energía eléctrica con rudimentarios y peligrosos medios de adquisición, construyen lentamente sus viviendas, y se reduce su consumo básico, para adquirir a precios especulativos, un poco de material cada vez que pueden, se hacen durante décadas en cuartuchos inhóspitos y mal ventilados, deben recorrer grandes distancias para llegar a los medios de transporte que no penetran en sus colonias.

En la Ciudad de México una vez que se saturó Netzahualcóyotl, se sucedieron otros muchos asentamientos; ahora es Chalco, donde cerca de un millón de personas vuelven a repetir la historia; y así en todos lados. Quizás el único cambio vi-

sible se da en el tipo de materiales usados (en demasiados casos, por el desconocimiento de las normas técnicas, se eleva desmesuradamente su costo). Antes eran materiales de desecho, y ahora son productos industriales (cemento, concreto, varillas de fierro, tabicón producido industrialmente, perfiles de fierro, teja de asbesto-cemento, etc.), lo cual muestra claramente que el capital ha ido asimilando a la forma precapitalista y artesanal de producir las viviendas de subsistencia.

En lo más recóndito de este infierno dantesco, en el corazón de la miseria se encuentran colonias de pepenadores, seleccionadores y recolectores de basura reciclable, fuertemente explotados y oprimidos por sus líderes e intermediarios que muchas veces son empleados oficiales y sus viviendas se ubican, precisamente, en el lugar de trabajo, en los gigantescos y malolientes tiraderos de basura de las grandes ciudades; en medio de estos tiraderos, cloacas de la sociedad, los insectos, las enfermedades y la carencia absoluta de todo lo necesario, vegetan tres generaciones de condenados del capital.

El urbanismo no ha estado nunca del lado de los desheredados del capitalismo dependiente, sino del lado de quienes los desheredan; siempre ha fracasado, no se ha aplicado eficientemente, o lo ha hecho para beneficio de los intereses del capital, de los empresarios y del Estado; sólo se ha logrado arrancarle ciertas concesiones mediante la organización, la movilización y la reivindicación. El estrecho canal de acceso a los productos de la arquitectura, consistente en la parte del salario indirecto y diferido a los subsidios de subsistencia para el ejército de desempleados, que es entregado mediante la infraestructura y servicios públicos, se cierra rápidamente como resultado de la privatización de los organismos o empresas estatales o por su rentabilización capitalista y por la drástica reducción del gasto público exigida por el capital y aplicada por el Estado.

La mayoría de la población trabajadora desconoce a los

arquitectos y a la arquitectura, a pesar de que construyen cada día, pues los profesionistas, formados en las prácticas liberales o para servir al gran capital y el Estado, son inaccesibles para las masas. La aplicación de sus conocimientos, inadecuados para las condiciones de miseria de los pobladores, sólo sirven para hacer desaparecer la lógica y la racionalidad constructiva surgida de la necesidad absoluta de sobrevivir.

La esperanza de superar esta situación reposa fundamentalmente en los movimientos sociales y en su capacidad de organización, movilización y reivindicación de cambios fundamentales en la sociedad: el movimiento universitario y la transformación de la universidad hará formar arquitectos y urbanistas comprometidos con las mayorías; el movimiento sindical servirá para frenar la reestructuración capitalista hecha en contra de los trabajadores y lograr una modernización democrática, autogestionable y en beneficio de los trabajadores; el movimiento campesino alcanzará formas de producción que corten el camino a la descomposición pauperizante; los movimientos de colonos e inquilinos pobres, así como los de ecologistas y feministas que detengan el proceso que conduce a las ciudades a convertirse en tugurios hacia una nueva barbarie urbana y a recuperar el territorio como base de construcción de una nueva ciudad para todos y no para el gran capital monopolista; dependerá de la vinculación de las organizaciones de masas con las políticas para poder crear las condiciones para la transformación profunda de la sociedad. Solo ellos tienen la fuerza y la razón necesarias.